



Fundación
de los comunes
(ed.)

La crisis sigue, ¡viva la crisis!

Elementos para un
nuevo ciclo político

***La crisis sigue,
¡viva la crisis!***

***Elementos para un nuevo
ciclo político***

traficantes de sueños

Traficantes de Sueños no es una casa editorial, ni siquiera una editorial independiente que contempla la publicación de una colección variable de textos críticos. Es, por el contrario, un proyecto, en el sentido estricto de «apuesta», que se dirige a cartografiar las líneas constituyentes de otras formas de vida. La construcción teórica y práctica de la caja de herramientas que, con palabras propias, puede componer el ciclo de luchas de las próximas décadas.

Sin complacencias con la arcaica sacralidad del libro, sin concesiones con el narcisismo literario, sin lealtad alguna a los usurpadores del saber, TdS adopta sin ambages la libertad de acceso al conocimiento. Queda, por tanto, permitida y abierta la reproducción total o parcial de los textos publicados, en cualquier formato imaginable, salvo por explícita voluntad del autor o de la autora y sólo en el caso de las ediciones con ánimo de lucro.

Omnia sunt communia!

© 2018, del texto, Fundación de los comunes.

© 2018, de la edición, Traficantes de Sueños.



Licencia Creative Commons
Reconocimiento-CompartirIguual 3.0 Unported (CC BY-SA 3.0)

Usted es libre de:

- * **Compartir** — copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra
- * **Remezclar** — transformar la obra
- * **Comercial** — hacer un uso comercial de esta obra

Bajo las condiciones siguientes:

- * **Reconocimiento** — Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciadador (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o apoyan el uso que hace de su obra).
- * **Compartir bajo la misma licencia** — Si altera o transforma esta obra, o genera una obra derivada, sólo puede distribuir la obra generada bajo una licencia idéntica a ésta.

Entendiendo que:

- * **Renuncia** — Alguna de estas condiciones puede no aplicarse si se obtiene el permiso del titular de los derechos de autor
- * **Dominio Público** — Cuando la obra o alguno de sus elementos se halle en el dominio público según la ley vigente aplicable, esta situación no quedará afectada por la licencia.
- * **Otros derechos** — Los derechos siguientes no quedan afectados por la licencia de ninguna manera:
 - Los derechos derivados de usos legítimos u otras limitaciones reconocidas por ley no se ven afectados por lo anterior.
 - Los derechos morales del autor;
 - Derechos que pueden ostentar otras personas sobre la propia obra o su uso, como por ejemplo derechos de imagen o de privacidad.
- * **Aviso** — Al reutilizar o distribuir la obra, tiene que dejar muy en claro los términos de la licencia de esta obra.

Primera edición: 500 ejemplares.

Junio de 2018

Título:

La crisis sigue, ¡viva la crisis!

Autor:

Fundación de los comunes (ed.)

Maquetación y diseño de cubierta:

Traficantes de Sueños.

Edición:

Traficantes de Sueños

C/Duque de Alba, 13

28012 Madrid.

Tlf: 915320928

e-mail:editorial@traficantes.net

ISBN: 978-84-948068-8-9

Depósito legal: M-20108-2018

La crisis sigue, ¡viva la crisis!

***Elementos para un nuevo
ciclo político***

Fundación de los comunes (ed.)



Índice

Introducción	9
¿Un nuevo ciclo?	13
La política como inercia y la inercia de lo político	19
Todo sigue siendo caos bajo las estrellas	25
La inercia autoritaria del Estado	31
La nueva política en su laberinto	37
¿Qué hacer con el nuevo reformismo?	45
Esperando a los bárbaros	49
Una sociedad que se rompe.	
Sindicalismo social y nuevo ciclo de movimientos	53
La nueva ola de feminismo global	59
Frente a la neurosis autoritaria:	
una política de libertad	67

Introducción

Este texto se escribió como ponencia política. Inauguró los IV Encuentros de Municipalismo, Autogobierno y Contrapoder, celebrados en Madrid entre los días 21 y 23 de junio de 2018. Firmado por la Fundación de los Comunes, sus líneas no reflejan sin embargo un consenso entre los integrantes de esta red de espacios e iniciativas. Se trata más bien de una discusión en marcha, un balance provisional.

Los propósitos de este pequeño texto se darían por satisfechos si logra provocar la discusión en una periodo particularmente difícil. De una parte, parece que el gran objetivo de la «Nueva Política» o de las «Fuerzas del Cambio», inaugurado con la irrupción de Podemos en enero de 2014 —la vieja «Hipótesis Victoria»— ha quedado embarrado en la conquista de algunos grandes ayuntamientos. A la altura de mediados de 2018 no hay expectativa de un gobierno protagonizado por Podemos y sus aliados, condenados a tener una posición subalterna al PSOE, y a ser testigos del avance y recomposición de las derechas de la mano de Ciudadanos. La imprevista moción de censura de primeros de junio no ha cambiado sustancialmente las perspectivas a medio plazo. De otra parte, el llamado «régimen del 78», si por este se entiende las relaciones sustanciales

del orden político (sistema de partidos, las formas básicas del Estado, el régimen de derechos y de las relaciones entre sociedad y Estado), se ha recompuesto de un modo que no deja de sorprender. Entre ambos polos, y en realidad en su tensión, ninguno de los elementos sustanciales que llevaron a la crisis política ha obtenido realmente solución. Parafraseando al viejo comunista parece que estemos en medio de esa crisis en la «que lo viejo no muere y lo nuevo no acaba de nacer: en este interregno se verifican los fenómenos morbosos más diversos».

<10>

En este registro se escribe. Pero antes de empezar, convengamos algunas precisiones. La crisis política, en la que se concentra la esfera mediática —crisis política en la que se incluye la nueva política con sus efectos contradictorios y a menudo frustrantes— apenas nos sirve para entender la crisis que atraviesa nuestra sociedad. No obstante, aquí no se trata de remitir la palabra crisis al colapso civilizatorio, que sin duda parece arrastrarse desde hace ya varias décadas. Más bien tratamos de analizar ese nivel más concreto y de tiempo medio que se abrió en 2008. Sin duda, y a pesar de la recuperación económica, seguimos metidos en el horizonte abierto por el *crash* financiero. Lo que llamamos recuperación es poco más que oxígeno artificial bombeado por las políticas monetarias expansivas a escala europea. Por eso también, seguimos metidos de lleno en una política, y por ende una crisis política, que solo se puede entender a escala europea. La premisa de partida de este texto es que nuestra crisis «nacional» es la pantalla de humo de una crisis de dimensiones continentales, y de un mando europeo y global que se esconde tras los colapsos políticos locales.

Al mismo tiempo se perciben elementos positivos. 2017-2018 ha sido un tiempo de despertar de la movilización. El rugido del movimiento feminista ha levantado una ola de protesta que recuerda en casi todo al 15M y que abre dimensiones quizás más profundas, en tanto apunta a un conflicto capital-vida, mercancía-reproducción, como problema principal de nuestra época. Y el feminismo no está solo. Pensionistas, trabajadores y trabajadoras precarias, el inquilinato, apuntan líneas de tensión que se superponen a las abiertas por la marea feminista. La cuestión es ¿qué promete y a dónde nos conduce esta ola de movimientos?

<11>

Valga por el momento, que aquí apostamos por una posibilidad. Estamos en la tercera fase del ciclo político que abrió el 15M. La primera fue una estación marcada por el movimiento de 2011. Entonces se plantearon algunas de las cuestiones fundamentales, que a día de hoy se han convertido en el abecedario de la política de nuestra época: el cuestionamiento del poder financiero, el problema de la democracia, Europa, etc. La segunda se inauguró con el acceso a las instituciones, con una velocidad y eficacia que a posteriori resulta todavía ambivalente y cuyos resultados son particularmente contradictorios. Pasadas estas dos estaciones, la tercera fase que hoy se abre ya no estará marcada por las inercias de la normalización institucional. Esta nueva fase, que en realidad es un nuevo ciclo, tiene que ser la de recuperación de las dimensiones de innovación y movimiento que la política institucional —también la nueva— es ya incapaz de promover.

¿Un nuevo ciclo?

Partamos de lo fundamental. Una nueva ola de movimiento barre la geografía peninsular: la huelga del 8M, las movilizaciones de los pensionistas, la reemergencia de los movimientos de sin papeles de nuevo en torno a la manta, la persistencia del movimiento de la vivienda y su desplazamiento sobre las luchas de los inquilinos, los nuevos conflictos laborales en Amazon, subcontratas, kellys, etc. Son pocas las claves que disponemos para entender una geometría tan variable y compleja, pero sabemos que la emergencia feminista está en el centro.

Las gigantescas movilizaciones del 8 de marzo no tienen una lectura sencilla —y aquí es improbable que logremos una aproximación suficiente—. En la ola feminista sobrevive todo un legado del 15M, en la forma incluyente, en el lenguaje, en la apelación múltiple. Seguramente, el feminismo ha sido el único movimiento capaz de contaminar y contagiar todo aquello que siguió al mayo de 2011. En su eclosión, en la huelga

de marzo de 2018, la protesta llevada del terreno reproductivo al laboral, con éxito, marca un precedente descomunal.

Seguramente estemos —o al menos así queremos verlo— en un proceso de extensión de la reivindicación feminista tendente a romper el esquema liberal de la simple paridad o igualdad de oportunidades. Parece que no se trata ya, o al menos no solo, de reivindicar la igualdad de género en los puestos de privilegio y poder: de tener alcaldesas mujeres, ejecutivas mujeres en el IBEX35, de filósofas, intelectuales y directoras de periódicos; sino en el fondo de cuestionar todas esas posiciones de privilegio y su corrosiva solidaridad con un orden de depredación social generalizado; un orden que está detrás de la violencia contra las mujeres y los más vulnerables en general.

<14>

En la forma de la huelga y en la atención a los cuidados —se apunta aquí la crisis de reproducción de nuestras sociedades—, el feminismo tiende a constituirse como la matriz inspiradora de los movimientos emancipadores de esta época. Aquel con mejores herramientas para enfrentarse a las dimensiones más generales del neoliberalismo financiero y su capacidad para engullir tiempo, energía y vida, destruyendo lo más elemental: el cuidado en la infancia, en la vejez, en la enfermedad. No obstante, en este tránsito queda casi todo por hacer, ¿cómo consolidar prácticas duraderas, nuevas instituciones, modalidades de autoorganización no efímeras? Y al tiempo ¿cómo ocupar esa centralidad, hecha de alianzas complejas, que habría de convertir al feminismo en la marca alternativa de un periodo?

En otro terreno, el que fuera el gran movimiento de los tiempos del 15M, el movimiento de vivienda, ha sabido perdurar y reescribirse en la nueva fase de

crecimiento del ciclo económico. Como antes, trata de evitar los desahucios, de encontrar alternativas, a veces a través de la okupación, otras de la negociación. La PAH y los grupos de vivienda siguen siendo una realidad organizada en centenares de barrios y ciudades. Pero a ellos se añade ahora otro espacio y otra figura de lucha, que se ve empujada por la nueva forma de crecimiento económico guiado por el redoble especulativo con los llamados activos inmobiliarios. En efecto, se ha formado una nueva «burbuja de alquiler», empujada por la nueva Ley de Arrendamiento Urbanos, el acortamiento a tres años de los contratos y las subidas repentinas de los bienes inmuebles. Esta viene también alimentada por los niveles de endeudamiento heredados, la depresión de los salarios, la incapacidad en definitiva de empujar a una parte importante de la población a la compra de vivienda, aun cuando el elevado precio de los alquileres parezca engordar de nuevo el crédito hipotecario. También, por otro lado, se certifican los «factores de recuperación», siempre asociados a las épocas boyantes de la especulación con inmuebles, el turismo, ahora dirigido sobre los centros urbanos. En este terreno, los sindicatos de inquilinos constituyen una nueva modalidad de sindicalismo social dirigido a mutualizar un problema las más de las veces experimentado en soledad.

<15>

Asimismo, la explosión de multitud de conflictos laborales parece indicar que la entrada en esta fase de aparente recuperación del crecimiento (una recuperación igualmente basada en el apalancamiento financiero de todos los agentes) no supone tanto un cierre, como una apertura de un nuevo ciclo de luchas. No es casualidad que los conflictos surjan en el sector logístico (la huelga de Amazon o incluso de los repartidores) o en el turístico (la situación y organización de las

llamadas Kellys), justo donde las condiciones de contratación y empleo muestran mayores niveles de precariedad y explotación. Se trata, en definitiva, de tentativas de organización del proletariado de servicios, precario y ultraexplotado, que constituye sin embargo la clave de bóveda de la «competitividad española». Por contradictorio que parezca, son estos los sectores y las figuras de futuro, la línea de tendencia de la especialización económica española. Y cabe preguntarse, ¿cómo estos conflictos, muchas veces al margen de la regulación-control sindical, pueden llegar a constituir formas de organización y protesta consistentes, y a la vez replicables en otros sectores y empresas? Se trata de una pregunta repetida desde hace décadas, y para la que de nuevo hay pocas respuestas.

<16>

En medio de la recuperación de la movilización, los interrogantes parecen más fuertes que las certezas. Se observa, por una lado, una tendencia al alza, una impaciencia, un no querer esperar, que se prueba en el hecho de que su desarrollo se produzca casi siempre al margen de los actores políticos y sindicales reconocidos (también los de la «nueva política»). Pero también se reconocen todas las debilidades de un movimiento que, como casi siempre ocurre, todavía no ha madurado.

Decíamos que el feminismo tiene potencial para ser el lenguaje de esta época, para convertirse en la contraparte del expolio financiero sobre la vida, manifiesto en la destrucción del Estado del bienestar y su sustitución por mecanismos de endeudamiento privados e individualizados: la vivienda como bien de inversión, los sistemas privados de pensiones, los seguros médicos privados, los créditos al estudio, etc. No obstante esto implica un trabajo de alianza entre segmentos

sociales fragmentados política y culturalmente. Una alianza para la que la izquierda (también la extrema) tiene poco que ofrecer. Cabe confiar en que la potencia de las luchas libre al final su camino en un curso compartido, pero convendría facilitar este esfuerzo.

La política como inercia y la inercia de lo político

La crisis se nos presenta, una y otra vez, como crisis política, de forma más concreta como crisis de la política nacional, del sistema de partidos, de los arreglos territoriales. Desempolvar esta imagen, o incluso retirarla por completo del análisis y de la hipótesis es seguramente el mejor favor que nos podemos hacer para inaugurar un nuevo ciclo político. Se trata, en primer lugar, de «desprovincializar» la política española, de desubicarla como el horizonte de resolución de la crisis política que abrió el 15M.

Quizás convenga repetir que aquí no nos valen los Gramsci de quita y pon. La izquierda española en su matriz comunista (incluso cínicamente, en la socialista) ha venido marcada por una permanente resurgencia de lo nacional-popular. A cada ocasión que se presentaba la posibilidad de un gobierno de izquierdas se obligaba a buscar el equilibrio entre las tareas de la revolución democrática pendiente y la conservación del poder frente a una derecha considerada monstruosa y predemocrática. También Podemos ha acabado por participar de este esquema, abocando el horizonte político a la realización, ahora sí, de las promesas frustradas en la Transición. Pero lo cierto es que la crisis española es solo un capítulo provinciano de una crisis continental. La insistencia en la crisis de régimen,

en lo que hay de crisis de «régimen», convertida cada vez más en una palabra vacía, ha sido quizás el mayor retroceso conceptual desde el 15M.

<20> Recordemos el movimiento-acontecimiento de 2011. Allí no hablábamos de los Rajoy y los Zapatero, si acaso estos eran los sicarios de un poder mayor, que la crisis nos había mostrado. Allí hablábamos de dictadura financiera y de poder europeo, de capital global y de las formas de gobierno de la Unión Europea. Este era el significado de la consigna «la crisis es una estafa». La crisis nos había permitido escalar rápidamente niveles de mando, pero no entretenernos con el PP, con el PSOE y con las comunidades autónomas. El enfrentamiento de la PAH y el movimiento de vivienda con la SAREB, esto es, con el Memorándum de Entendimiento impuesto por la UE, nos mostró la escala del conflicto posible, al nivel máximo con el poder financiero. El enfrentamiento parecía bien situado: a un lado nuestra vida, al otro los poderes financieros.

Y sin embargo, en el lapso de unos meses, nos vimos hablando en exclusiva de «crisis de régimen» y de régimen del '78. No hay nada que objetar a estos términos. Nada que oponerles en el terreno más estricto de la descripción inmediata. La llamada democracia española es un «régimen político», un determinado orden de las instituciones de Estado, de las formas de relación entre estas instituciones y la población. Pero la cuestión es que este régimen no tiene nada de original, nada de sustancial.

El problema del concepto «régimen del '78» aparece cuando tal término se convierte en el objetivo exclusivo de todas las energías políticas. Cuando por su inercia nos vemos metidos, otra vez, en la política nacional, en lo que los italianos llamarían su *Italietta*, y nosotros,

también con viejas resonancias, nuestro «ruedo ibérico». Conviene apuntar bien a las responsabilidades. Fue Podemos (y en general la nueva política) quien hizo todo por enredarnos en esa fantasía de la política nacional y su autonomía. Y fue la nueva política quien nos propuso un gobierno de «salvación» —no le hizo ascos a este término— en la forma de una política institucional patriota, pura, incorruptible.

Valga decir que la viscosa adherencia del término «régimen del 78» ha servido tanto para hablar de proceso constituyente —quizás el horizonte más prometedor del pasado ciclo—, como del viejo debate entre monarquía y república, así como del igualmente viejo conflicto entre las partes nacionales. Pegados a este concepto —lo que indica que es la nueva zona de confort de la clase política— parece que andan todos. Ahí anda la nueva política, que señala el cambio como una superación del régimen, primero en forma de ruptura (proceso constituyente) y luego en forma de conservación democrática de lo mejor de la Transición. También están ahí las élites conservadoras catalanas haciendo empleo de un término, que como eufemismo de «post-franquismo» les ha servido para ocultar su larga colaboración en los equilibrios políticos del país, esto es, su constitución como «régimen del 78». Y por supuesto, ahí está también la extrema izquierda, que hoy puede reivindicar que siempre tuvo razón. La extrema izquierda convertida en frasco de todas las esencias.

La nacionalización de la política española en torno al «régimen» constituye el síntoma más obvio de que la política al fin está volviendo a su cauce, esto es, que los actores políticos han hecho su trabajo consistente en la despolitización de los efectos del 15M. Los últimos años pueden describirse como de absorción de

la crisis política, luego institucional, abierta en mayo de 2011. La llegada de Podemos al Parlamento europeo (mayo de 2014), los ayuntamientos del cambio (mayo de 2015), las dobles elecciones generales (diciembre de 2015 - junio de 2016), han sido progresivamente asimilados en este nuevo marco político.

<22> En el nivel más epidérmico, la crisis del sistema de partidos se ha ido resolviendo poco a poco con un retorno de lo viejo, si bien remozado y multiplicado, como ocurre cuando las viejas marcas empiezan a dar síntomas de obsolescencia. Así hemos asistido a la recomposición del PSOE, tras la operación Sánchez, y a la partición del PP, entre el frente liberal y joven de Ciudadanos, y el viejo partido de Estado, agotado por los escándalos de corrupción. También hemos padecido el estancamiento y luego retroceso de Podemos: igual da que tal erosión se evalúe en las citas electorales, que en el CIS. El nuevo cuatripartito ha impreso a la política institucional un dinamismo que el bipartidismo no conocía. Sin embargo, sustancialmente, la crisis de 2011 no ha encontrado una solución institucional.

En este juego complejo de tendencias, la crisis catalana ha sido, a la vez, un factor de orden y de desorden. De desorden e incluso de oportunidad para una reforma del Estado (un proceso constituyente). La hipótesis de cierta izquierda —sobre todo de cierta extrema izquierda tanto catalana como española— estaba cifrada en que la ruptura catalana podía empujar a las élites más allá de sus propios compromisos. De acuerdo con estos parámetros, el bloque popular acabaría por desbordar a la clase política, a los herederos de Convergència y ERC. Y desde ahí produciría una ola de contagio en el resto del Estado, en otras regiones y pueblos. La confirmación parcial de tal hipótesis pareció encontrarse en

algunos momentos en el referéndum del 1 de octubre, en la gigantesca manifestación del día 3, en la formación de organismos no encuadrados por la dirigencia institucional del *procés* como fueron los CDR. No obstante, en cuanto vector de contagio más allá de Catalunya, la ruptura catalana se ha probado una quimera.

Como factor de desorden —pero no tanto de ruptura— la crisis catalana se puede leer en la misma línea de descuadre de los arreglos intra e interélites. El acuerdo entre las élites catalanas y las élites de Estado permanentemente pospuesto es signo de la profundidad de la crisis política. Y sin embargo, es difícil no reconocer aquí que este elemento conflictivo y desajustado ha entrado pronto en el marco de una estabilización institucional, a la contra de la hipótesis izquierdista que lo comprendía como el nudo donde se podría desatar la segunda fase instituyente del 15M. Se podría decir incluso, que a pesar de la tensión, las élites de Estado nunca han llegado a perder completamente el control sobre el *procés*, llegando a subordinar la cuestión catalana en provecho de una solución restauradora.

Después de octubre de 2017, la hoja de ruta del Estado se ha trazado como un desplazamiento, bastante explícito, del esquema del enemigo interno constitutivo del régimen del '78. De la polaridad constitución / terrorismo, Estado / ETA característica de la democracia española se ha pasado a la de Constitución / secesionismo. De forma atemperada, casi cómica —en tanto el origen del conflicto reside, entre otras cosas, en un conflicto entre élites que se superpone a la crisis de las propias élites—, el agonismo entre soberanismo / constitucionalismo, independentismo / unionismo ha logrado el objetivo mínimo de galvanizar las adhesiones políticas. Durante un

tiempo al menos, la crisis política ha adoptado la forma exclusiva de la crisis catalana. Marca de su éxito ha sido la sobresaturación de la agenda mediática, que consiguió empujar casi todo lo que quedaba de la agenda 15M (desde la reforma del Estado hasta las políticas de vivienda) a la marginalidad.

<24> En este sentido, la participación del Estado en la crisis de Cataluña lejos de profundizar la llamada «crisis de régimen», la ha empujado a hacer una política activa; logrando, por primera vez desde 2011, una adhesión de masas. El temor de una minoría social significativa ante el peligro, más bien infundado, de la independencia catalana ha espoleado a las nuevas y viejas derechas españolas dejando fuera de juego al PSOE y a Podemos, concentrado en la propuesta más bien inane de la plurinacionalidad. Al menos durante un tiempo, la crisis catalana, ha venido a salvar la incertidumbre institucional del régimen. Una salvación quizás de fantasía, pero que de momento aparenta solidez.

Todo sigue siendo caos bajo las estrellas

Y sin embargo, todo sigue siendo caos bajo las estrellas. Tras diez años de crisis y seis después del 15M ninguno de los elementos, fuerzas o factores que empujaron la situación ha encontrado un cierre, una «solución». La crisis política sigue abierta, porque no se han sellado las fracturas subterráneas que minaban los cimientos de los viejos órdenes.

Aquí conviene remitirse, una vez más, al elemento fundamental: la economía política del gigante europeo sigue gripada, por no decir sumida en una enfermedad crónica. Más adelante desarrollaremos algo más este diagnóstico y su pronóstico. De momento vale con destacar que en estos diez años de crisis, la economía española no ha sufrido ningún proceso de reconversión radical capaz de encaminarla en la liga de la competitividad mundial formada por los grandes productores de tecnología avanzada. La especialización, y con ello la competitividad de la economía española, se reconoce una vez más en la explotación intensiva de las rentas territoriales: turismo internacional y atracción de capitales a su por momentos burbujeante mercado inmobiliario.

En términos sociales, esta especialización determina una estructura de empleo especializada en servicios de consumo, por tanto precarios y de baja remuneración.

Si a esto se añade, la propia presión financiera sobre el gasto público se obtienen los principales elementos de la tendencia social a medio plazo: la precarización sostenida cuando no creciente, la erosión paulatina de las clases medias, el desarrollo de la figura del trabajador pobre, la recurrencia a la fuerza de trabajo migrante en las fases expansivas del ciclo, la degradación de los servicios públicos, el encarecimiento de la vivienda, etc.

<26> La traducción política de esta tendencia es relativamente libre, pero no así en lo que se refiere al anidamiento de las rentas políticas en el ciclo económico. En las economías capitalistas persisten un buen número de formas de renta políticamente determinadas. Estas no comprenden sólo las modalidades ilegales y menos legítimas, como lo que conocemos bajo el nombre de corrupción, sino también toda una serie de formas legales o alegales, que en sustancia sostienen la cohesión de la clase política y lubrican la relación entre decisión política y negocio económico. En España, una parte importante de estas rentas se han obtenido por la vía de la contratación pública ligada al ciclo inmobiliario.

La crisis prácticamente destruyó estas formas de renta y con ella buena parte de las redes clientelares y de favores de la clase política española. Esta ha sido la base del desmoronamiento interno de los partidos políticos y del continuo sarpullido de escándalos e imputaciones. La mayor parte de las filtraciones y de las denuncias provienen, de hecho, de compañeros de partido. El fuego amigo refleja la pérdida de cohesión de la clase política, incapaz de subordinar la lucha redistributiva y por el control político a la más mínima solidaridad interna necesaria para sostener a las formaciones políticas.

La ruptura de la solidaridad intra élites y su absoluta pérdida de credibilidad social ha ahondado la crisis de representación de largo recorrido que asola a la democracia española, al igual que al resto de democracias europeas. La clase política se ha mostrado como una oligarquía parasitaria sin cobertura ideológica alguna.

La descomposición de la clase política, causa última del desplazamiento del régimen turnista al cuatripartito, tiene además otro efecto más grave. Impide la escenificación y celebración del pacto que se requeriría para promover una teatralización, por frágil que fuera, de una Segunda Transición: unos grandes pactos de Estado que sellaran la regeneración democrática. Los conflictos entre las élites —la cuestión catalana es, entre otras muchas cosas, un caso extremo de este modelo— y el resbaladizo terreno, tanto electoral como judicial, en el que están obligadas a manejarse, desplazan permanentemente a futuro la solución de la «crisis política».

<27>

La escena parece así dominada por una sesión continua de agonismo político, pero siempre limitado al regate táctico entre posiciones políticas. La necesidad de buscar adhesión social en este juego intra élites empuja la escalada discursiva en línea con estrategias populistas de uno u otro tipo. Especialmente por parte de los aspirantes a formar nuevas élites políticas, la estrategia populista, el enfrentamiento dramatizado entre un pueblo vapuleado y una oligarquía arbitraria y externa, se presenta a veces como la única forma de abrir posición. De nuevo Podemos sentó el precedente al decantarse por esta estrategia narrativa, ya presente en el 15M, frente a la ciudadanista democrática que todavía era dominante. Y de nuevo Podemos abrió el camino a este juego discursivo desde la derecha, en el momento en que renunció a construir puntales sólidos

de organización y conflicto territorial que podrían haber consolidado antes una práctica que un simple discurso electoral.

<28> Estamos, por tanto, en el tiempo de los monstruos, en ese largo interregno entre lo viejo y lo nuevo. La institucionalización de la nueva política, al tiempo que la prolongación de la crisis, ha abierto la oportunidad que canceló temporalmente el 15M. El nuevo populismo, ahora rayano con formas blandas de fascismo, está encontrando sus fuentes de alimentación popular en el miedo al desclasamiento, el pavor hacia la figura del pobre y el migrante, el resentimiento hacia la clase política empujada por una posición de indefensión inmerecida.

La búsqueda de renta electoral a través del estímulo de este tipo de discurso ha propulsado a Ciudadanos. Confeccionado en sus primeros tiempos como el partido de orden arquetípico, casi una síntesis de laboratorio de los elementos de centro —y por ende conservadores— del gran partido de Estado, PP-PSOE, Ciudadanos está ahora tratando de explotar el resentimiento popular. Se trata, para ellos, de una estrategia nueva, que se prueba en Catalunya por primera vez en la forma de una defensa constitucionalista (y por tanto nacionalista). Pero que a la vez incluía elementos anti-*procés*, y por tanto ambivalentemente antioligárquicos. Su éxito en el área metropolitana de Barcelona, caladero natural del voto socialista y del abstencionismo, se debió a su capacidad para galvanizar a los excluidos históricos de la nación política catalana, aprovechando el fallo igualmente histórico y evidente de la izquierda catalana.

No obstante, Ciudadanos parece haber sido el primero en explotar esta oportunidad a una escala más general. Un solo ejemplo está en su sostenida campaña

en barrios en los que no tiene ninguna implantación, pero en los que genera y explota la emergencia de una incipiente guerra entre pobres hecha de drogas, okupación e inseguridad ciudadana. Barrios en los que acompaña las ambivalentes movilizaciones contra los «narcopisos» –de la que se deriva una campaña antiokupación social y política– o donde pone mesas periódicamente para hablar con los vecinos.

La pregunta que cabe hacerse es cómo puede reverberar este fascismo blando y retórico, impulsado por las élites políticas en su lucha táctica por mayores cuotas de poder institucional, con la militancia fascista real. En los últimos años, este campo político y social ha empezado a dar muestras de inteligencia e innovación sin precedentes. La inversión de una estética de extrema izquierda juvenil y de algunas formas de sindicalismo social reforzadas por la crisis (desde el centro social hasta el banco de alimentos) han generado una pequeña constelación de experiencias, con centro en Madrid y el llamado Hogar Social. Se trata de experimentos underground de la extrema derecha pero que generan proyecciones inquietantes.

<29>

No disponemos, de momento, de un dibujo claro de las posibles articulaciones entre ambas dimensiones. Aunque es improbable que el nuevo fascismo militante llegue a generar una dinámica de masas autónoma capaz de trascender a la arena político-electoral, como un quinto actor no residual a semejanza de lo que ocurre en otros países europeos, sin duda empujará y hará más difícil la política territorial de movimiento en muchas ciudades; y a la vez servirá como punta ofensiva de este discurso en clave de gobierno, esto es, por parte de los partidos de Estado. Por eso de nuevo, conviene remitirse a las estrategias de Estado, o más

concretamente a cómo la crisis política (del sistema de partidos) impacta en el Estado, favoreciendo unas tendencias u otras.

La inercia autoritaria del Estado

Existe un elemento constituyente del Estado español, un elemento que se puede reconocer en todos los Estados con origen en el absolutismo y que en España entronca con su genética profunda. Se trata de su constitución propiamente autoritaria, inscrita siempre en la propia forma-Estado, pero que en el país se reconoce también en la secuencia práctica de los partidos de Estado, el PP y también el PSOE. No se trata, o al menos no solo, de la persistencia de la herencia franquista, sino de algo más complejo.

El enfoque histórico es, en todo caso, inevitable. Ciertamente, la Transición aparece como el acontecimiento clave: de forma particular, el reformismo franquista constituye el verdadero transmisor de esta tradición de Estado que luego contagia al PSOE en el gobierno, a partir de 1982. En el reformismo franquista se encontraban dos elementos combinados y apenas disociables. De un lado, una propensión al pacto, a la integración de la izquierda institucional (PSOE y PCE) según un modelo de larga data, y previo al franquismo, inspirado en el turno de la Primera Restauración, que por convención se atribuye a Cánovas tras el fracaso de la I República. En buena medida, el hecho de que la democracia española se pueda describir en términos históricos como una II Restauración, que sigue

también un periodo desorden (los agitados años setenta) y de acuerdo a un modelo turnista, es algo más que una analogía.

<32>

De otra parte, el reformismo franquista conservó un celoso espíritu de protección y conservación del Estado, tendente a imponer su razón (la razón de Estado) en cualquier situación de crisis o de amenaza de crisis, y contra cualquier forma de «enemigo interior». La persistencia de la lucha armada y el fenómeno terrorista durante los años ochenta permitió además la transmisión de todo el entramado institucional heredado del franquismo y que en la práctica suponía la permanencia de un régimen de excepción atenuado. Así, la Audiencia Nacional heredera del Tribunal de Orden Público franquista, las tramas policiales paralelas que tuvieron su mejor momento con los GAL de la década socialista, y una propensión al empleo extralimitado de la ley, que se ha traducido en una interpretación cada vez más autoritaria y excepcionalista de la Constitución. La prolongación del conflicto vasco permitió mantener continuamente actualizada la maquinaria de excepción del Estado y a la vez las formas de legitimación social de la misma.

Frente a la inercia de Estado, el 15M actuó como un eficaz neutralizador de esta tendencia autoritaria y excepcionalista. Su capacidad de innovación y la renuncia a disputarle la calle con el empleo de la violencia permitieron una notable ampliación práctica del derecho a la protesta; a pesar incluso de la ofensiva legal restrictiva con la reforma del código penal (ley mordaza). No obstante, el reflujo de la movilización unido a la propia crisis del sistema de partidos han generado un resurgimiento de las tendencias autoritarias. Y aquí es preciso analizar más factores que la retirada parcial de la marea política que levantó el 15M.

En la reacción del PP a su propia crisis, esta formación política ha ido consumiendo todo lo que rodeaba a su espina dorsal, hasta el punto de ser eliminados del gobierno en junio de 2018. De hecho lo que verdaderamente sorprende en los populares es su supervivencia tras la imputación de cerca de un millar de sus activos y la liquidación (reemplazos incluidos) de las direcciones de sus principales feudos: Madrid y Valencia. Cierzo, el PP se puede analizar como una colección de bandas políticas asociadas a intereses empresariales que saquean los presupuestos y los bienes públicos. Esta es una imagen correcta, pero insuficiente. Los populares en sentido genuino son también el partido del Estado o, de una forma más correcta, de las élites funcionariales. Abogados del Estado, jueces, altos funcionarios constituyen el nervio de esta formación en mayor medida que el PSOE y, desde luego, que los nuevos partidos. Las élites de Estado son la columna sobre la que se vertebra en última instancia la derecha española como fuerza de gobierno y sustancia del poder de Estado. Su cohesión interna y su ánimo frente a la crisis política constituyen un elemento oculto pero tan importante como la propia escenificación mediática de los partidos oficiales.

<33>

El reciente giro represivo del Estado tiene que ver con el cambiante ánimo de estas élites de Estado. Aparentemente, asistimos a una estrategia coherente manifiesta en un número cada vez mayor de procesos y sentencias contra raperos, cantantes, tuiteros, además del tratamiento punitivo de la cuestión catalana —gratuita en términos de gobernabilidad—: en general, somos testigos de una ola represiva sobre aspectos que deberían ampararse por las libertades de reunión y expresión. Es difícil, sin embargo, comprender el sentido de este movimiento como una estrategia

concertada y unánime. El número de francotiradores de la derecha mediática y judicial es demasiado alto. La vacilación es la norma: en ocasiones, el gobierno de los populares parecía animar el movimiento, en otras se veía obligado a retractarse. Más bien, la sensación es la de la puesta en marcha de ciertos automatismos, que operan de modo fraccional, antes que coordinado. Crisis de élites de nuevo.

<34> La fragilidad de este movimiento se redobla debido a la ausencia de proyecto positivo. La derecha, al igual que el PSOE —y de hecho también los nuevos partidos— parecen, hoy por hoy, incapaces de lanzar una iniciativa fuerte, que cargue la política institucional con nuevas dosis de innovación y proyecto, aunque solo sea a nivel de marketing electoral. La prueba la encontramos en la falta de propuestas de recambio del PSOE en el gobierno. Molicie y mediocridad. La consecuencia es un reforzamiento de las derivas represivas concomitantes a la tentación populista.

De otra parte, apenas contribuye a empujar en otra dirección la complicidad, casi siempre involuntaria, de la inercias izquierdistas y progresistas. Desde fechas recientes, estas han tendido a reclamar al Estado y a la judicatura un mayor punitivismo en los casos en los que la justicia y la legitimidad parecían soplar de su lado, especialmente en relación a los derechos civiles. El efecto de boomerang de este tipo de política ha tenido su ejemplo más notable en el apoyo a la catalogación del delito de odio, casi unánimemente aplaudido por el PSOE y la izquierda y luego vuelto contra el derecho a la protesta. Hoy el delito se aplica más para amparar a los cuerpos de policía y la guardia civil, que a los colectivos LGTB.

En definitiva, el giro represivo antes que una política fuerte y decidida, resultado de la imposición de una nueva hegemonía cultural neoconservadora, parece marcado por una doble debilidad. Del lado de las élites de Estado, su propia crisis las empuja de forma desordenada hacia salidas represivas, que operan a veces sobre cierto sustrato legítimo y popular. Del lado de la izquierda histórica, pero también del movimiento, se observa una notable incapacidad de convertir esta debilidad en una ofensiva por las libertades de expresión y reunión, y también por un anti-punitivismo sin excepciones.

<35>

Aunque en el 15M, en su propuesta constituyente y democrática, se esbozó el problema, no existe ni atisbo de elaboración estratégica que apunte a aislar y limitar el poder de Estado. Tal apuesta debería ir, necesariamente, en la dirección de replantear las cuestiones fundamentales relativas a la judicatura, la legislación penal y el castigo —en primer lugar el sistema carcelario— en claves netamente no punitivistas. Para la izquierda y a veces también para el movimiento, con toda la ingenuidad, el Estado y la legislación penal parecen haberse convertido en herramientas en la lucha política y moral; cuando obviamente son la parte mayor del problema.

La nueva política en su laberinto

El giro autoritario puede explicarse como inercia de las élites de Estado, como ausencia de alternativa o como resultado de la propia descomposición de la clase política, pero ¿responde también a un giro social conservador? El 15M, ya se ha dicho, actuó como un dique. Desvió la corriente del malestar social y de los resentimientos provocados por la desafiliación social en el torrente de la revolución democrática. Su práctica fue una profilaxis eficaz a una deriva que podía aproximarse a la nueva derecha. Y sin embargo, su mutación en política institucional (en nueva política) necesariamente debía modificar la estructura y la resistencia de ese dique. En la forma de esta mutación se dirimía el precio de la adaptación institucional. En buena medida, si alguno de los elementos en juego ha mostrado una deriva conservadora no ha sido tanto un abstracto cuerpo social, cuanto la nueva política.

En menos de cuatro años, el nuevo espacio político de Podemos y las candidaturas municipalistas en las grandes ciudades ha generado una considerable estructura política. Un edificio cuyos ladrillos y pilares son los representantes políticos, los figurones mediáticos y las burocracias de partido. En los anales estadísticos de la industria de la representación se ha incorporado un nuevo «segmento ideológico» formado por

<38>

entre 4 y 6 mil liberados, concejales, diputados y toda clase de asesores. Pero la traducción monetaria —en forma de capital simbólico, mediático, relacional y puramente pecuniario— del 15M no se ha producido sin costes. De una parte, la nueva política ha envejecido pronto y mal. La institucionalización y la creación de una nueva burocracia la ha llevado a soltar amarras demasiado rápido. En estos años, la nueva política ha arrojado por lo borda buena parte de lo que le sirvió de empuje: movimientos, activistas, sectores politizados en el 15M. La nueva política se ha quedado así sola, en el espacio en el que resultaba más improbable su victoria, el de la política institucional y la esfera pública construida por los grandes medios.

De otra, la aceptación de Podemos en la arena pública —política y mediática— no ha consistido en una simple incorporación del discurso fresco y crítico de la parte social indignada. También consistió en la absorción de ese mismo discurso y de sus portavoces en el marco de la política institucional normalizada. Sin contrapesos sociales y organizativos sólidos, esta absorción era inevitable y estaba condenada a imponerse por encima de vocaciones y buenas voluntades. La llamada nueva política constituye un ejemplo crítico de formación de una nueva élite política, pero de una élite integrada.

Para aquello que se levantó como movimiento y expectativa el 15 de mayo de 2011, el precio político de la construcción de una élite reside en la descapitalización de todo lo que representa. Por eso, el control de la representación —de su representación— es tan importante para los movimientos. Y por eso conviene siempre insistir en la construcción de una organización democrática capaz de servirse de sus portavoces

sin concederles autonomía alguna. Una organización que es, al mismo tiempo, mucho más que la mera «prolongación de Estado» a la que inevitablemente están abocados los partidos políticos, cuyo pasto está hecho principalmente de subvenciones y de cargos públicos. La construcción de tal organización no ha sido prioritaria para Podemos, que combatió todo residuo activista como un veneno que aislaba y separaba de la gente; y apenas ha tenido importancia en algunas candidaturas municipalistas. Valga señalar que el precio político de la nueva política ha sido pagado por tod*s, por el movimiento en general, con independencia de la mayor o menor vocación institucional de cada una de sus partes.

<39>

Efecto de la rápida institucionalización de la nueva política ha sido también la absorción de los lenguajes y las formas de la política institucional. En un año, entre mayo de 2014 y mayo de 2015, se pasó de la ruptura y del «venir a cambiar las instituciones» a adoptar el estilo moderado y de responsabilidad institucional característico del turno progresista. El punto de bifurcación se sitúa en mayo de 2015, cuando las expectativas de cambio se canjearon por el gobierno de ocho grandes ciudades, y docenas de poblaciones de mediano tamaño.

Valga decir que la victoria municipal fue un éxito imprevisto. Las candidaturas y sus sistemas de integración de la diferencia —de incorporación de viejos y nuevos activismos— lograron lo que Podemos no consiguió hacer: ganar. Pero es cierto que estos ayuntamientos fueron pronto acorralados, empujados a renunciar a parte de la radicalidad de sus programas. La relativa impotencia se adaptó así a una interpretación conservadora de la ideología ciudadanista ya presente en el 15M.

El lema «gobernar para la gente» se convirtió en aquel de «gobernar para todos». A pesar de las mil excepciones que se puedan mencionar y de algunas realizaciones destacables, los ayuntamientos del cambio, con el Madrid de Carmena a la cabeza, fueron quedando reducidos a un propósito y estilo de buena gestión, de buenas intenciones. También las candidaturas desencantaban y generaban una creciente indiferencia. La crítica dio un nombre al viraje gerencialista; empezó a hablar de «gubernismo». La inexperiencia y los gobiernos de minoría no podían ser esgrimidos como razón suficiente de esta frustración de expectativas.

<40>

De otra parte, tras los magros resultados de las elecciones generales de diciembre de 2015, nuevamente reducidos en junio de 2016, la institucionalización interna de Podemos se confirmó en una nueva forma de «cretinismo parlamentario». El divorcio con la pretensión de «ruptura» —populista o constituyente, igual da— se había consumado. La degradación del programa 15M se produjo en una larga serie de bandazos pero que apenas se desviaban de una dirección única. Progresivamente, la demanda de proceso constituyente se dejó de lado en favor de un gobierno del cambio, y el gobierno del cambio acabó por ser concebido, finalmente, como un gobierno de progreso: lo que implicaba al PSOE, primero subordinándolo, luego a cualquier precio. La crítica a la Transición y a la forma de la democracia española pasó también por sucesivas etapas: negación y crítica, valoración más equilibrada y recuperación de lo mejor, aceptación y propuesta de nueva transición y, finalmente, relegación y abandono del problema. Elementos novedosos como la renta básica también fueron dejados de lado en pro de medidas de reforma fiscal y de defensa de las políticas de la vieja socialdemocracia, cuando no de un

ramplón social-liberalismo. Los determinantes fuertes de la política nacional-estatal, especialmente Europa y el capital financiero, ni siquiera fueron planteados. Estos elementos de escala global, apenas podían tener espacio en el cuento —o relato, si empleamos sus propios términos— sobre el que se fundaba Podemos y que repetía una y otra vez: «Si llegamos al gobierno...» Poco sorprende así, que la «agenda», empujada por la crisis catalana y por la descomposición de la clase política, empujara a Podemos a los márgenes del terreno que consideraba su fuerte: el institucional-mediático.

<41>

La cuestión es ¿puede Podemos revertir su propia inercia? Analicemos brevemente lo que es hoy la hipótesis Podemos. Consideremos las ideas recientes de su estrategia, Íñigo Errejón, artífice de casi todas las consignas que han servido para mantener una mínima coherencia interna de la dirección del partido. Desde 2018, apenas dos: la reformulación de la colaboración con el PSOE como «competencia virtuosa» y la «patria es el orden». Respecto a la primera se trata, poco más, que el anuncio ya cumplido de la alianza con el PSOE, pero ahora presentada bajo el concepto de «competencia virtuosa». La simplificación es grande pero se viene a decir así: «La competencia entre PP y Cs empuja hacia la derecha la agenda política, sin modificar la alianza de base sustantiva de "las derechas". Se trata de establecer, por tanto, un régimen de competencia-cooperación. El objetivo de Podemos consistiría en repetir ahora un modelo parecido con el PSOE». La prueba decisiva parece que se confirma a partir de la moción de censura del primero de junio de 2018.

La idea de la ventana de oportunidad, presentada en el otoño de 2014 (Vistalegre I) y que pasaba por el arrinconamiento de los socialistas ha sido así sustituida por

la de la competencia-cooperación con el viejo partido en el ámbito compartido de las fuerzas progresistas. La vuelta a la vieja polaridad (izquierda-derecha) y el abandono de cualquier atisbo de reforma del Estado (al estilo de la vieja consigna constituyente del 15M) nos devuelve al craso realismo (siempre conservador y siempre estrecho) del juego electoral. Y con él al viejo esquema turnista de la II Restauración. Es lo que parece ocurrirle al nuevo gobierno del PSOE; gobierno, que no sólo se elige en las claves viejas del turno (la sustitución de un PP en descomposición), sino que está doblemente atado por los presupuestos heredados y por las vigilancias de Bruselas.

<42>

La otra idea, «la patria es el orden». Quizás aquí no merezca tanto repetir la crítica sobre la disputa del significante «España». Basta recordar donde se ha situado este en relación con la cuestión catalana y su irrelevancia en términos de la economía política y su crítica, al fin y al cabo, los únicos que pueden fundar una política material de transformación. No obstante, merece considerarse, aunque sea brevemente, su asociación con el significante «orden», que progresivamente sustituye al del «cambio». Se asiste aquí a una obvia deriva conservadora, pero sobre todo a una lectura conservadora de las tendencias sociales de fondo. En esta ocasión, se apuesta por «resignificar» el orden, y por tanto la inseguridad social y económica de amplios sectores de población, en términos de una unidad nacional coherente y solidaria. Las reverberaciones con el tercerismo —incluso con cierto estilo joseantoniano— se solapan con la nostalgia del viejo Estado de bienestar. La operación es clara: consiste en disputar lo que se concibe como línea de época a las nuevas derechas en el mismo terreno de la solidaridad nacional y el soberanismo. Para ello se dejan de lado buen número de

los elementos centrales que resultan disonantes con la operación discursiva: los derechos de los migrantes, Europa, la colisión entre soberanismo y una economía altamente globalizada y financiarizada, etc.

La «patria es el orden» constituye, en realidad, el colofón de una constante de la hipótesis Podemos. Desde sus orígenes, el proyecto se ha considerado únicamente en término de acceso al gobierno (hipótesis estatólatra). El supuesto de la hipótesis asumía los costes de tal institucionalización, menos como un problema que como un prerrequisito del acceso al gobierno. A la vez, la política de Podemos debía dejar de estirar la situación para ver que puede dar de sí (proceso constituyente, nuevas demandas), a fin de adaptarse a un sentido común imaginado, una centralidad considerada siempre en términos conservadores o moderados.

<43>

Los problemas de este enésimo giro de la hipótesis Podemos —que en realidad no suponen una innovación sustancial respecto a formulaciones previas— tienden a reincidir, de este modo, en los viejos problemas, hundiendo nuevamente a la organización en sus propios límites y contradicciones. Al concentrar las energías en la innovación en el discurso sobre la base de una ficción social conservadora, se marginan las energías de una militancia disponible para un proyecto más ambicioso. Al asumir el objetivo único del gobierno, se vuelve a disputar todo en el terreno electoral mediático, menospreciando, una vez más, hasta hacerla desaparecer, la peana organizativa y social del partido y al simplificar la complejidad social en una operación discursiva, sin base material, se tiende a hacer un discurso cada vez más ideológico, incapaz de servir para la articulación de luchas y contrapoderes. En general, en Podemos, el pensamiento de la crisis y el sentido

de la crisis, en el que las viejas formas de regulación política saltan por los aires, ha quedado limitado a una operación electoral estrechamente conservadora.

¿Qué hacer con el nuevo reformismo?

La cuestión es, en parte, ¿qué hacer con la nueva política? O de una forma más clara ¿cómo emplear sus restos? Ya lo hemos visto, Podemos ha envejecido rápido y mal. Pero concluida su evolución, esto es, convertido en el «partido de la izquierda» va a tender a ocupar el nicho ampliado de la vieja Izquierda Unida o, en el peor de los casos, de un PSOE renovado. De este espacio no se puede esperar ni más ni menos que de lo que fueron aquellos. Ninguna evolución positiva, ninguna apertura real a las emergencias políticas que puedan aparecer estos años, ninguna inteligencia para leer la coyuntura más allá del regate corto del juego electoral. Pero al mismo tiempo, Podemos responde a una sensibilidad paradójica, propia de una generación política conservadora, pero que también se debe a una época.

Reformismo es una vieja palabra. Servía para aludir a los partidos de la izquierda, incapaces de entender el movimiento real, que en ocasiones —como el '68 o la década de 1970— podía empujar la situación hacia un terreno incierto, pero situado más allá de la democracia liberal. Reformismo no aludía a un programa legítimo de reformas, aunque este fuera su coartada, cuanto a una impotencia sustancial para leer una época y

empujar en la línea de la transformación posible. En este sentido, la nueva política ha acabado por ocupar la figura del reformismo de nuestro tiempo.

<46> Podemos fue la promesa del cambio sin esfuerzo — el «cambio político»— con todos los límites que esto entrañaba. Podemos concitó también las aspiraciones de una generación condenada al vagabundeo entre la precariedad absoluta y la profesionalización incierta. Entre tanto, sin embargo, se ha convertido en el vagón de una nueva clase política estrechamente mezquina. No obstante, y aquí está la oportunidad política, Podemos se debe en todo a las propias demandas del 15M. En su genética no puede escapar a la condición de un partido nacido de la protesta. Esta es a un tiempo su debilidad y nuestra oportunidad. Su novedad descansa en su condición de nuevo interlocutor «reformista». Nótese bien, interlocutor frágil, incapaz de incluir y «recuperar» la emergencia, pero al mismo tiempo incapaz de ignorarla.

Desde 2015-2016, se ha establecido una suerte de nueva física política en la relación con este reformismo. Aunque esta lógica atraviesa toda la nueva política, el punto más interesante se encuentra en la relación con los gobiernos municipales. Por su porosidad, por la mayor complejidad de muchos de estos consistorios y también por su propia debilidad, los llamados ayuntamientos del cambio han permitido articular un juego, a veces virtuoso, con las presiones de campañas y movimientos no comprometidos con los intereses de la mera autorreproducción de la emergente clase política.

La situación y la forma cambia según ciudades. En ocasiones —así ha ocurrido en Madrid en varias ocasiones—, se trata de procesos políticos que se sitúan en una relación conflictiva con el Ayuntamiento, empeñado en

seguir viejas lógicas heredadas en materias sensibles como urbanismo o vivienda. En estos casos, el conflicto abierto con el Ayuntamiento golpea en su línea de flotación, como el programa colaborativo que impulsó su victoria en 2015, rompe la unidad del consistorio y obliga al menos a una negociación. En otros casos —así ha ocurrido en Barcelona, también en varias ocasiones—, los movimientos adoptan una forma lobbista, formalmente incluida en el propio Ayuntamiento, pero que reverbera en todo un territorio externo al mismo y que empuja al gobierno municipal a impulsar una política que de otro modo no hubiera llevado a cabo.

<47>

La práctica política así establecida consiste, por tanto, en golpear y empujar, aprovechar las contradicciones de la institucionalización de la nueva política para impulsar un programa que al reformismo le resulta incómodo y problemático. Esta práctica está sin embargo en ciernes, apenas probada en grandes ciudades, tampoco realizada en los gobiernos autonómicos y aún por experimentar en la fase del gobierno del PSOE con apoyo de Podemos. Al mismo tiempo, requiere de una separación radical respecto del discurso de la responsabilidad institucional, que una y otra vez se esgrime para apuntalar la impotencia política. También requiere sortear la dinámica de competencia y hostilidad que la nueva política genera contra los sectores que impulsan estas prácticas. Se trata de enfrentar la nueva política a la raíz última de su legitimidad.

Por nombrar de alguna forma esta práctica, y por tratar de hacerla extensiva a otros territorios, más allá de los ya ensayados, podríamos decir que la hipótesis frente al nuevo reformismo consiste en *estar dentro y contra la institución. O lo que es lo mismo, estar dentro y al margen de la nueva política.*

Esperando a los bárbaros

La política tiene siempre algo de espera. Y aquella de movimiento —la vieja política revolucionaria— lo tiene de forma doble. Esperar nada tiene que ver, sin embargo, con confiar en el curso de los acontecimientos; con la vieja idea progresiva del «desarrollo de las fuerzas productivas que llevará necesariamente, etc...». Sostener y ampliar aquellas estructuras que dan soporte a la actividad política —centros sociales, cooperativas, colectivos y organizaciones— es algo tan necesario como mantener la respiración cuando esta empieza a estar impedida. La cuestión es que los ciclos políticos no se abren a golpe de voluntarismo. La política de movimiento es también, y por eso, espera y premonición, un juego de adivinación que plantea avanzar las tendencias y fisuras por las que se volverá a colar la fuerza capaz de quebrar las viejas estructuras.

El elemento principal es aquí el de la coyuntura económica. No se logra entender la crisis política sin las enormes olas de malestar que por abajo han socavado las confianzas o la indiferencia política; y que por arriba han destruido la solidaridad y coherencia interna de la clase política. La autonomía de lo político es estrecha.

Comencemos por precisar la forma que tiene la «recuperación». De una parte, elementos ya conocidos, familiares, en la historia reciente del país. España ha

vuelto a ser el lugar de la colocación de capitales en los circuitos territoriales de acumulación. Su diversificado sector inmobiliario ha proporcionado nuevos segmentos rentables: las líneas de costa, los locales comerciales, el alquiler. La reforma de la ley de arrendamientos de alquileres del PP ha otorgado nuevos poderes a los propietarios. La propiedad proporciona rentas a buen ritmo. Pero la propiedad ya no es solo la de la clase media que ha salvado la crisis, sino la del gran capital financiero.

<50> La consolidación de la figura de las SOCIMIs (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria) ha permitido la inversión inmobiliaria a gran escala. La concentración de activos en manos de los grandes bancos y de la SAREB lubricó la entrada en el mercado de miles de viviendas y locales en régimen de alquiler. Progresivamente, fondos, SOCIMIs y grandes agentes financieros han ido controlando porciones mayores de los segmentos más rentables de mercado: locales comerciales de las ciudades medias y grandes, viviendas en alquiler, espacios de oficinas. La coyuntura positiva ha venido espoleada también por el nuevo desarrollo del turismo y su redireccionamiento —a través del capitalismo de plataforma tipo Airb'n'b— sobre los grandes centros urbanos.

La pregunta es ¿hasta cuándo se podrá mantener esta recuperación, que hoy se celebra? No se trata solo de volver a señalar, que la recuperación se ha producido sobre viejas claves que empiezan a rozar umbrales de no retorno: deflación salarial, empleos más precarios. Se trata también de situar las bases del modelo español en su propia debilidad.

Conviene saber que los resortes monetarios e institucionales sobre los que se ha articulado este impás económico al que se ha llamado «recuperación», están

a punto de desaparecer. A causa de la oleada de crisis políticas encadenadas que vivió el sur de Europa durante el periodo 2010-2014, el Banco Central Europeo, en contra de sus propios estatutos, se lanzó a una política de compras masivas de deuda pública de los países de la zona Euro que, pasados dos años, se completó con su ampliación a la compra de deuda privada. Esta política monetaria expansiva, que seguía la estela de las emprendidas antes por Estados Unidos y Japón, permitió inundar de liquidez los mercados financieros. Alejó así las tensiones sobre el mercado secundario de deuda pública, epicentro de la crisis del Euro.

<51>

En España, estas políticas produjeron, primero, una tenue reanimación y luego un despliegue creciente de todos los elementos de la especialización inmobiliaria, que define tanto la posición española en la globalización como la vertebración interna de su economía. Y sin embargo, este ciclo está tocando a su fin. La gravedad del problema reside en que no hay una solución de recambio. Por eso, el Banco Central Europeo ha ido posponiendo la retirada de los estímulos económicos y una subida de los tipos de interés. Y esto a pesar de la presión de una Alemania, que necesita volver a tensionar la zona euro para seguir su política de superávit comercial y de posicionamiento como acreedor europeo y global.

En definitiva, el tiempo se acaba. El relevo de Mario Draghi por Jens Weidmann ha dado el control directo del Banco Central a Alemania, y lo ha hecho en uno de los contextos más turbulentos desde la crisis *subprime* de 2007. El *crash* de Wall Street en febrero de 2018 y su continuación en una profunda guerra comercial entre Estados Unidos y China, y de forma indirecta por ahora, la UE, ha llevado la inestabilidad desde las

finanzas hasta el tipo de vinculación de los aparatos productivos transnacionales que conocemos como «globalización». En última instancia, los elementos de crisis se profundizan a nivel global y van dejando cada vez más al descubierto la incapacidad del capitalismo financiero, y por extensión del capitalismo, para generar ciclos productivos expansivos. Esta es la clave de la falta de capacidad para ordenar política y socialmente las sociedades capitalistas occidentales.

Una sociedad que se rompe.

Sindicalismo social y nuevo ciclo de movimientos

Crisis europea y recuperación española. Sencillamente algo no cuadra. Desde hace algún tiempo, la nueva política (los nuevos políticos) proponen abandonar los discursos catastrofistas, cabalgar el relato de la recuperación económica. Jardineros de los brotes verdes desean ser portadores de buenas noticias. Ante todo, quieren anunciar el retorno a la normalidad y la vuelta al orden de las clases medias y el consumo, vitales para el nuevo reformismo.

Pero los datos insisten con tozudez. Sabemos que las desigualdades se están ampliando. Cualquier retórica de la recuperación lleva implícita una contradicción y al menos algo parecido a una renuncia: la de hacer «movimiento popular», si con ello nos referimos a promover organizaciones y movimientos que nazcan de las necesidades y las luchas de las clases más desfavorecidas. A pesar de que el término del «movimiento popular» parece connotar una cierta distancia sociológica —como un adorno que no necesitaba demasiada validación práctica—, no debemos olvidar que las dimensiones de movimiento, de las luchas organizadas desde abajo, son el factor determinante para avanzar hacia un nuevo ciclo político.

Conviene señalar, por eso, cuál es la base material de la política posible. Consideremos los datos salariales. En el último decenio la masa salarial ha sufrido un recorte global que supera los 50.000 millones de euros; una cifra que se acerca curiosamente al coste público del rescate bancario. A día de hoy, más de 13 millones de personas viven en riesgo de pobreza en esta país. En conjunto el 16 % de la población está hundida en una pobreza estructural y un 26 % continúa en riesgo de caer en ella. Los datos de pobreza y precariedad siguen por encima de los niveles de la crisis. La recuperación, parece, solo se valida para una parte de la sociedad.

<54>

Empleos precarios, desaparición de los derechos laborales y trabajadores pobres definen a sectores enteros como la hostelería, la logística, el empleo doméstico o el turismo. A ello se añaden también los efectos de la «recuperación española», el amago de una nueva burbuja, basada en los alquileres desorbitados, además del retorno del ciclo hipotecario y de los créditos al consumo, que igualan y superan los datos de los años previos a la crisis. En conjunto, la economía española se sigue definiendo por empleos con salarios de miseria, subidas sostenidas del precio de la vivienda y el aumento desigual de la presión que se carga sobre los hombros de los segmentos sociales más desfavorecidos

Y sin embargo, no estamos ante un desierto de las prácticas de protesta. En los últimos años, se comentaba al principio, han ido naciendo formas sindicales de nuevo cuño, movimientos organizados y luchas de trabajadores y trabajadoras. Algunos ejemplos son la PAH y el movimiento de vivienda, los sindicatos de inquilinos, las luchas de Las Kellys, los sindicatos de

Manteros, las huelgas de Amazon, Deliveroo o Movistar, y las asambleas y coordinadoras de la Huelga de Mujeres del 8 de marzo.

Se trata espacios autoorganizados basados en la lucha, capaces de construir un frente de defensa eficaz. Obviamente, más allá del contexto de agotamiento y estancamiento del ciclo institucional, sigue siendo necesario pensar nuevos modelos de organización social. Nuevos sindicatos que agiten y consoliden derechos, también que construyan una institucionalidad propia, arraigada en el territorio: factor antagonista y de radicalización del ciclo institucional, y por supuesto movimiento autónomo y constituyente frente a los aparatos de Estado.

<55>

Algo podemos decir ya sobre estas luchas. En primer lugar, casi todas han superado y desbordado las lógicas del sindicalismo tradicional. Recordemos que la huelga feminista del 8 de Marzo fue organizada por una coordinadora autónoma y que la cobertura legal fue proporcionada por organizaciones anarcosindicalistas como la CGT, mientras que las tradicionales CCOO y UGT se quedaban por detrás, en lo que a prácticas y discursos se refiere, convocando tan solo paros de dos horas.

De otro lado, se trata de procesos que —por su posición autónoma con respecto a partidos y sindicatos— han devuelto a la organización estructuras democráticas y colectivas de funcionamiento. Las asesorías colectivas de la PAH, las asambleas de inquilinos o las coordinadoras de activistas han superado la clara tendencia instalada en las viejas formas sindicales a individualizar y jerarquizar los conflictos. Su primera victoria es que han sido capaces de hacer avanzar movimientos de lucha y solidaridad entre los sectores

más precarios del sistema laboral, precisamente aquellos que estaban diseñados para dificultar y hasta imposibilitar la organización colectiva.

<56> Se añade, que estas luchas se han abierto en el corazón de la nueva economía política de nuestras ciudades: en el sector inmobiliario y el sector servicios, principalmente en la hostelería y la restauración. Estos son los sectores de la nueva chacinería patronal, una maquinaria de precarización laboral, destrucción del lazo social y encarecimiento de la vida; que produce salarios de miseria, contratos temporales, horarios extensivos y subidas descontroladas del precio de la vivienda. Pero también son los lugares de resistencia.

Otra característica de estas nuevas formas sindicales es que desbordan ampliamente el terreno laboral. Parece ya evidente que la centralidad política reside en las dificultades para sostener la vida. La crisis es, sin duda, una crisis de cuidados. Algo evidente para quienes se encargan mayoritariamente de esta labor, las mujeres, y cada vez más, las mujeres pobres y migrantes. Nos vemos remitidos una vez más a las potencias del movimiento feminista. El feminismo no sólo ha destacado y politizado el trabajo de cuidados —tanto el asalariado como el que no se paga—, que finalmente hace posible el teatrillo de las economías productivas, sino que ha ofrecido una respuesta política contundente: la huelga general. Limpiadoras, Kellys, trabajadoras domésticas, cuidadoras de residencias de ancianos, maestras de infantil; en la feminización de la pobreza y de la precariedad encontramos a la vez la mayor potencia transformadora de nuestro tiempo.

Con todo, los retos son abrumadores. Estamos todavía en una fase tentativa. La pregunta reside en cómo hacer arraigar estos nuevos movimientos, cómo

encarnarlos en comunidades concretas y sobre todo cómo producir su alianza. En el terreno de estas nuevas formas de autoorganización destaca de nuevo la hipótesis del sindicalismo social. Se trata de sindicalismo «social», porque no hace distinciones entre lo productivo y lo reproductivo, porque cuestiona el reparto de la riqueza y el modelo de producción, porque atiende al bienestar a partir de la defensa de nuestros derechos y porque entiende que la desigualdad se nutre de fuertes discriminaciones raciales y de género.

<57>

Pero esta propuesta no deja de ser la de un gran sindicato de nuevo cuño. Y sindicato quiere decir formas concretas de agrupación y de organización. Sin duda, se trata de articular luchas, demandas, de lograr conquistas materiales. Pero también hay que hacer persistir formas de organización y de institucionalidad política consistentes. Estamos quizás en los primeros pasos en la constitución de nuevas formas de contrapoder social. ¿Cómo se puede contribuir a acelerar este proceso de constitución política de una forma masiva y concreta?

La nueva ola de feminismo global

Feminismo, movimiento de época, decíamos. La pujanza del movimiento feminista parece anunciar un nuevo horizonte de esperanza y fuerza. Se trata de algo más que palabras. Algunos apuntes:

1. *Un movimiento feminista global.* El #NiUnaMenos de las argentinas ha inaugurado un periodo de interpelación feminista a escala internacional. En el centro, la cuestión de los feminicidios. Este *hashtag* corrió como la pólvora, encendió una llama que alcanzó las dimensiones de incendio global. #NiUnaMenos nos hizo comprender la conexión entre las manifestaciones masivas contra la violencia de género en todo el mundo. Pero la consigna no era puramente expresiva: la organización de las dos últimas convocatorias del 8 de marzo con lemas, demandas y formatos de protesta comunes elevó las aspiraciones del movimiento. Si el 8 de marzo del 2017 lanzó una ambiciosa invitación a un paro internacional de mujeres —que aterrizó de forma más o menos exitosa según países—, el último 8M del 2018 radicalizó la apuesta con la convocatoria de una huelga feminista. Se promovía así un desplazamiento de las violencias machistas (feminicidios, violaciones, agresiones y abusos sexuales) a la fuente socioeconómica de la producción y reproducción del patriarcado,

esto es, a la división sexual del trabajo. En la raíz de la nueva fuerza política feminista estaba un conjunto de causas complejas. Sin duda, la presencia de las mujeres en todos los espacios de la vida pública: la calle, el mundo laboral retribuido, los media, las redes, la arena política, etc. Las nuevas generaciones de mujeres han crecido y se han socializado en el mundo de la teórica igualdad formal, de la igualdad en derechos; y hoy no parecen dispuestas a ceder ni un milímetro en los terrenos conquistados.

<60>

Otro elemento a tener en cuenta, son los usos creativos de Internet y de las redes sociales, que también estuvieron en la base de las primaveras políticas de 2011. El desmoronamiento del opaco y elevado muro de separación entre los espacios público y privado ha producido enormes grietas sobre las que rezuma la politización de lo antiguamente entendido como «lo personal». Lo personal se ha vuelto más político que nunca, y lo ha hecho a una escala global.

Pero más allá de las causas, ¿dónde reside esta capacidad de interpelación planetaria? Sin duda, en la lucidez, la osadía y la generosidad de superar el marco del Estado nación como escala de transformación. Pese a la sempiterna tentación de regreso a dicho marco, tanto por parte de las fuerzas políticas de extrema derecha (que prometen salvarnos de las consecuencias de la globalización cerrando fronteras y retornando a autarquías imposibles), como de unas izquierdas tradicionales aún persistentemente refractarias a entender las dimensiones irreversibles de la división internacional del trabajo, ni las patrias ni las banderas sirven de nada cuando las dimensiones del conflicto alcanzan una escala global.

El movimiento feminista sabe que la división del trabajo se despliega en el mismo terreno internacional que la división sexual y, que esta última es de hecho, parte de la primera. Su horizonte de organización tiene necesariamente una vocación transfronteriza.

2. *Feminismo es anticapitalismo*. Volvamos al núcleo más materialista y concreto de la crítica feminista. Cuando pone la vida en el centro, el movimiento feminista impugna la economía entendida como depredación de los recursos de todos en provecho de la acumulación para unos pocos. Los discursos provenientes del ecofeminismo, en especial, revelan las mistificaciones de los conceptos nacidos de la modernidad: el progreso o el desarrollo entendido únicamente en términos tecnológicos o de avances científicos. Vivimos de hecho tiempos de un «progreso» que no asegura el bien común y ni siquiera aspira a él. El mundo existente y prometido es una fábrica de miseria, de explotación, de guerra, de esclavitud y de muerte.

<61>

Apenas sorprende, por eso, que sean los movimientos feministas, y las mujeres en general, el agente político activo en las luchas por la tierra, la soberanía alimentaria, la vivienda, los cuidados. Llámese crisis de los cuidados o división sexual del trabajo, lo que el feminismo pone en el centro es el reconocimiento, reparto y socialización (no solo mediante dispositivos público estatales, sino también a través de una responsabilización de orden social y comunitario) de todos los trabajos que sostienen la vida. Desde la crianza a la atención a la enfermedad, pasando por el acompañamiento a las situaciones de dependencia, al fortalecimiento de las redes que hacen posibles las relaciones humanas en general y las políticas en particular. La

apuesta del movimiento feminista es por eso anticapitalista: el desafío está en sustituir la acumulación de capital por el sostén de la vida como eje articulador de la economía que organiza nuestros tiempos, nuestros espacios y nuestras formas de vida.

<62>

3. *Inclusivo, plural y transversal.* La relación de dominio patriarcal no entiende de fronteras, ni de etnias —y es transversal a las clases—. Como un espejo invertido, el feminismo está mostrando una capacidad para integrar situaciones de opresión específicas.

Recordemos las décadas de 1970 y 1980. Estas trajeron la imprescindible y enriquecedora ruptura del sujeto «mujer», estallado en una proliferación de múltiples feminismos. Florecieron, en especial, los feminismos relacionados con las distintas orientaciones sexuales, las diferentes identidades de género y los feminismos racializados. Los feminismos negros y los insubordinados a la norma heteropatriarcal, en todas sus declinaciones, ampliaron y diversificaron (no sin resistencias, conflictos y tensiones) los ámbitos de batalla feministas. También se ampliaron las alianzas potenciales y las herramientas (teóricas y prácticas) para poder abordarlos.

Hoy, en el contexto de ataque brutal a las condiciones materiales de vida que llamamos neoliberalismo, el desafío del feminismo no debería estar en la reconstrucción de un sujeto político único. Conviene rechazar las operaciones peligrosamente reunificadoras, invisibilizadoras o aplanadoras de las opresiones específicas. El movimiento se plantea profundizar en el reconocimiento de todos los proyectos autónomos de acción política; todos aquellos capaces de construir teórica y experiencialmente una política contra las

diversas especificidades de la opresión patriarcal (en función de la etnia, la religión, la edad, la orientación sexual, la identidad de género o la diversidad funcional). Tejer alianzas empoderadas capaces de alcanzar objetivos de conquista material comunes pasa por este reconocimiento. La división sexual del trabajo y todas sus declinaciones (feminización de la pobreza, no reparto ni socialización de las tareas de cuidados o de «reproducción») no parecen un enemigo fácil de combatir, pero constituyen, irrefutablemente, un enemigo compartido.

<63>

Tanto el desarrollo actual de las herramientas de lucha feminista, como el empoderamiento y osadía política del movimiento nos colocan en una situación ventajosa de cara a superar las versiones más impotentes del feminismo. Hablamos, por un lado, del feminismo liberal, que asfixia toda capacidad transformadora en el malentendido de la igualdad formal. Y por otro, criticamos determinadas modalidades identitarias que, en nombre del feminismo, renuncian a la acción política conjunta en pos de lugares de victimización narcisistas, culpabilizadores y poco productivos políticamente.

Entre estas tendencias identitarias resulta preciso resaltar al menos dos, que nos plantean debates urgentes. La primera corresponde a aquellos espacios o grupos que sucumben al «fenómeno» de la denominada violencia de género. En otras palabras, a la banalización que desde los medios de comunicación y desde la política de la representación, reduce el conflicto real (la relación de dominio y explotación estructural que es el patriarcado), a una cuestión de víctimas y de verdugos, de hombres y mujeres, de violencias machistas únicamente entendidas como agresiones físicas y

<64>

feminicidios. La segunda está relacionada con aquellos colectivos o proyectos que anteponen las políticas del ser a las del hacer, y prefieren dibujar jerarquías de opresión a acordar objetivos políticos comunes. En palabras de la anglo-india Pratibha Parmar, en su esfuerzo por explicar el declive de los feminismos negros de los años ochenta en Gran Bretaña: «Muchos de estos movimientos se están estancando porque hay un rechazo a reconocer la necesidad de salirse de las formas del ser (de esa acumulación de "ismos" de raza, sexo, clase, discapacidad, etc), e ir hacia las formas del hacer».

¿Podría este movimiento —de vocación internacionalista, anticapitalista y de acción política transversal— relevar a una «izquierda» confusa y perdida en sus estrategias de Estado? ¿Podría este movimiento generar formas de organización capaces de superar las formas de la representación, y al mismo tiempo situarse en el conflicto exitoso que mejora materialmente nuestras condiciones de vida?

Entramos en una fase decisiva. Tras la demostración de la potencia de la movilización, palpitan redes formales —como la organización del 8M, la incipiente articulación de miles de periodistas, una miríada de grupos—. Asistimos a un estado de opinión, a un clima, ¿por qué no?, hegemónico. Este nuevo magma feminista tiene una capacidad demostrada: así se ha visto en la respuesta a la sentencia de la Manada. Es de prever que sobre esta base, sea complicado perder derechos. Sin embargo, ¿cómo conquistar otros nuevos?

Aventuramos la necesidad de componer una agenda plural pero compartida que pueda vincular el núcleo de sus demandas —la cuestión de la reproducción y sostenibilidad de la vida como eje transformador de toda la sociedad— a las luchas en marcha. Si las

reclamaciones laborales, de los pensionistas, contra la precariedad y por la renta básica forman parte de lo que aspiramos que sea un cambio global hacia una sociedad feminista, estaremos más cerca de ampliar el ámbito de los derechos. El motor de la movilización es la violencia machista. Progresivamente, sin embargo, el foco se desplaza de la violencia hacia otra violencia: la precarización del trabajo y de la vida que viene acompañada por la contracción de un Estado del bienestar, ya de por sí parco. La dictadura de las finanzas contra la posibilidad de una vida más allá de la mera subsistencia debería ocupar buena parte de los debates y de la agenda de movilización feminista y supone otro de los retos pendientes.

Frente a la neurosis autoritaria: una política de libertad

La crisis política persiste. La regeneración democrática ha resultado ser una quimera y el Estado parece ahora empeñado en una respuesta excesiva, enfangado en una oleada de ataque a las libertades. Al tiempo, las élites políticas insisten en enfrentamientos internos de todo tipo. Decíamos, es tiempo de monstruos y de fenómenos morbosos: retorno de la pulsión autoritaria de un Estado que siempre encuentra nuevas y más perversas formas de actualización; auge de un tercerismo oportunista y sin escrúpulos, ahora encabezado por Ciudadanos; estragos de las políticas austericidas neoliberales en las condiciones de vida de la inmensa mayoría.

Quizá no haya muchas razones para ser optimistas. Pero este escenario tiene su vuelta. Existen, sin duda, contra-movimientos y creación política. Movimientos que parten de los problemas concretos y que se articulan con formas directas y no representativas. Ya hemos hablado de la marea feminista. Pero toca insistir, también, en el papel fundamental de la política antirracista y de la lucha contra las fronteras.

Ni el movimiento feminista, ni ningún otro espacio que aspire a generar prácticas políticas de contrapoder podrá disparar certeramente sin tener en su punto de mira el racismo institucional. El nombre que este adquiere —aunque no solo— es el de la ley de

extranjería. Esta ley determina el marco legal que convierte a las personas de origen extranjero en mano de obra explotable cuando interesa, desechable cuando deja de hacerlo. La ley funciona como una fábrica de fuerza de trabajo degradada al estatus de personas sin derechos, de vecinos y vecinas de segunda, sin papeles, excluidos del estatus de ciudadanía.

<68> Frente a este régimen de fronteras, frente a esta construcción en términos culturales de un «Otro» alóctono (extranjeros, migrantes, refugiados) y, sobre todo, frente a la instrumentalización del acceso desigual a derechos por parte de las élites políticas, ha ido cobrando fuerza un espacio de alianza de gran potencial transformador. En nombre del antirracismo, se está componiendo una alianza entre una juventud de segunda generación (de padres migrantes pero nacida en esta país), a la que a veces se añade una juventud de etnia gitana. También en relación con la lucha por los papeles, se puede seguir un particular hilo rojo que empieza en los encierros de principios de los años dos mil y llega a las más recientes luchas de los manteros contra la persecución, el maltrato y la deportación y continúa en la nueva ola de encierros que han tenido origen en Barcelona.

Conviene considerar en toda su amplitud la centralidad de la lucha contra el racismo. Este no es un dispositivo marginal y superable con políticas progres (de tipo derechos humanos). El racismo es cada vez más la forma fundamental de gestión en una situación de recursos sociales vueltos escasos. En el racismo se conjuga en última instancia la guerra entre pobres. Se conforma como el espejo institucional que requiere el «liberalismo» global, en tanto forma límite de negación de la libertad de circulación, acceso a la salud, a

la educación y a una renta digna. El racismo segrega e inventa diferencias, en pos de una fragmentación social que viene a añadirse a la máquina de atomización que ya es el neoliberalismo como sistema económico y como cultura social.

Pero en esta línea de acción política impugnadora del régimen de fronteras y del racismo toca encarar algunos desafíos. Para la nueva alianza política, que se define y organiza desde la racialización, el reto reside en reconocer también los problemas comunes en los que la raza se cruza con el género y la clase. De otra parte, para los espacios que luchan contra las fronteras impuestas a la libertad de movimiento (colectivos por los derechos de las personas migrantes y refugiadas) y contra las fronteras de acceso a una vida digna (en lucha por el derecho a la vivienda, a la salud, a condiciones de empleo dignas), el envite consiste en componerse con los nuevos discursos y formas de acción política organizados desde las identidades racializadas. Para todos los espacios políticos organizados desde la autonomía en pos de un cambio social profundo, resultará preciso encontrar horizontes comunes de transformación en los que el eje antirracista tenga un peso central. No parece haber otro modo de combatir esa estrategia de división social que tiene forma de guerra entre pobres, ahora tan funcional al neoliberalismo y sus mecanismos de expropiación de la riqueza.

En esta tarea, todas las autonomías de organización son necesarias, desde cada una de las vivencias situadas, desde todas las opresiones específicas. Pero para emprender y sostener un movimiento político capaz de vencer las políticas neoliberales no parece quedar otra que superar las limitaciones de las batallas particulares

y las miopías impotentes del cortoplacismo. Por encima de todo, hay que trabajar en tejer una alianza feminista y antirracista mestiza, una máquina de producción de paradigmas y prácticas políticas liberadoras.

<70> En términos simplificados, el tiempo que se abre vendrá marcado por el conjunto de tendencias que hemos tratado de describir: líneas a veces contrapuestas y enfrentadas y en otras ocasiones ambivalentemente mezcladas. Nuestra labor política consistirá también en discriminar. A un lado habrá que poner las tendencias autoritarias del Estado, los microfascismos concomitantes a la guerra entre pobres y a su explotación por una élites políticas sometidas a una lucha agónica. Al otro habrá que ir colocando todas las aspiraciones de este tiempo nuevo: desde el proceso constituyente y la revolución democrática que se probaron en el 15M, hasta las mareas por los derechos sociales que siguieron a la explosión de 2011, pasando sin duda por las emergencias centrales del nuevo ciclo, el antirracismo, y sobre todo el feminismo. Todo ello en el marco de la crisis de la nueva política, crisis seguramente irremediable, pero que debería dar lugar a un aprovechamiento mejor y más inteligente de las posiciones institucionales que monopoliza la nueva clase política. El reto consistirá en no mostrar ninguna ambigüedad frente a su urgencia por la autorreproducción, pero seguramente tampoco ninguna vuelta a posiciones reactivas y estrechamente sectarias.

En definitiva, tiempo de oportunidades. La situación es provechosamente caótica. La situación está abierta.

